

Desde México hasta Argentina

Revisiones de mochilas y control: la respuesta de la región a la violencia en las salas de clase

Algunos países han implementado medidas restrictivas ante el aumento de casos.

NICOLÁS GARCÍA DE VAL
 Corresponsal en Brasil

La violencia en establecimientos educacionales ha comenzado a ocupar un lugar central en el debate público en varios países de América Latina, entre ellos Chile, en medio de una preocupación creciente por episodios que van desde el *bullying* hasta ataques graves dentro de colegios. Distintos gobiernos han adoptado medidas como controles de seguridad más estrictos o programas de convivencia escolar, en un intento por enfrentar un fenómeno que especialistas vinculan con cambios en la dinámica social y la circulación de contenidos violentos en internet.

El aumento de casos en Brasil

Brasil es uno de los países donde la discusión ha adquirido mayor intensidad en los últimos años. Datos oficiales muestran que el número de víctimas de violencia en escuelas pasó de cerca de 3.700 en 2013 a más de 13.000 en 2023, lo que representa un incremento de 254% en una década.

Algunos episodios recientes han intensificado la preocupación pública. En abril de 2023, en Santa Catarina, un hombre mató con un hacha a cuatro niños en un jardín infantil. Un mes antes, un estudiante de 13 años atacó con un cuchillo a alumnos y adultos en la Escola Estadual Thomázia Montoro, en São Paulo, matando a una profesora.

“Me acuerdo de haber visto algo sobre eso en la televisión, y se parece mucho a lo que pasó



EL ATAQUE en el colegio Thomázia Montoro en 2023 es uno de los más recordados del último tiempo en Brasil.

acá”, dice João, un estudiante de 16 años del colegio Christus, en la zona sur de Fortaleza (al noreste de Brasil), donde en diciembre un alumno de 15 años hirió a un compañero, un profesor y una coordinadora con un cuchillo.

Según un estudio del Instituto Sou da Paz, en Brasil se han registrado al menos 32 ataques extremos contra escuelas entre 2022 y 2024, con 52 víctimas fatales. La coordinadora de proyectos del instituto, Danielle Tsuchida, plantea que estos episodios representan “la expresión más grave de la situación de violencia que afecta a los colegios”.

Tsuchida sostiene que el aumento de estos episodios responde a varios factores. Entre ellos menciona la expansión de “discursos de odio” en redes sociales, así como la existencia de comunidades en línea que reclutan a ado-

lescentes y difunden ideas extremistas, racistas o misóginas.

Para Thayná Alves, del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía, la violencia no se limita a los ataques dentro de los establecimientos. En zonas de favelas y periferias, explica, “la violencia armada cerca de las escuelas se volvió parte de la rutina”.

Frente a este escenario, el gobierno brasileño ha impulsado diversas iniciativas, como el programa “Escuela que Protege”, que busca fortalecer la capacidad de las redes educativas para detectar riesgos y responder a situaciones de violencia. También se implementaron medidas como detectores de metales y presencia policial en los colegios.

El cuestionado plan mexicano

Otros países de la región tam-

que no portaran armas. La actividad debía realizarse, de ser posible, en cooperación con los padres.

La iniciativa generó un amplio debate por presuntas violaciones a la privacidad de los estudiantes. La Corte Suprema declaró inconstitucional el programa federal en 2021, pero algunos estados retomaron la medida, intentando evitar los elementos cuestionados, como la participación de policías.

Episodio de violencia en Santa Fe

En Argentina, la discusión sobre violencia en escuelas también ganó visibilidad tras episodios recientes. Uno de ellos ocurrió el lunes, en la provincia de Santa Fe, donde un adolescente disparó contra compañeros en una escuela secundaria, causando la muerte de un estudiante e hiriendo a otros jóvenes.

Estudios sobre convivencia escolar muestran que la violencia cotidiana entre estudiantes es un problema extendido. Un informe de la organización Argentinos por la Educación indicó que el 63% de los alumnos de sexto grado afirma haber sufrido algún tipo de agresión en el colegio o redes sociales.

Vinculado a este tema, en febrero, el Congreso aprobó una ley que reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad penal. La medida generó un intenso debate político y social. Mientras el gobierno argumentó que la reforma busca responder a la utilización de menores por parte de redes delictuales y fortalecer la seguridad pública; organismos internacionales, como la Unicef,

cuestionaron la iniciativa.

Normas estrictas de vestimenta

En El Salvador, la respuesta ha adoptado un enfoque diferente, vinculado a la política de seguridad más amplia impulsada por el gobierno de Nayib Bukele. En 2025, el Ministerio de Educación introdujo nuevas normas disciplinarias en las escuelas públicas, que incluyen reglas más estrictas sobre presentación personal, uniformes y comportamiento de los estudiantes. Según explicó el propio Bukele, las medidas buscan evitar que los establecimientos educacionales se conviertan en espacios de reclutamiento de pandillas.

Mientras el gobierno sostiene que buscan reforzar la disciplina y prevenir la violencia, gre-

mios docentes y algunos sectores de la sociedad civil han criticado lo que consideran una “militarización” del sistema educativo. Luis Aguilar, académico de la Universidad Centroamericana en El Salva-

dor, dice que la explicación del gobierno es “poco plausible”.

“Lo que se presenta como una política de prevención de violencia juvenil se convierte en un mecanismo para limitar la pluralidad de voces y garantizar la continuidad del proyecto político de Bukele”, asegura.

La discusión sobre cómo enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales sigue abierta en distintos países de América Latina, donde autoridades, especialistas y comunidades escolares no terminan de ponerse de acuerdo sobre cómo enfrentar el creciente problema de la violencia escolar.